

Minería y fusil

Bibiana Ramírez

El Bajo Cauca antioqueño es una región árida. Desde hace más de cien años la minería se ha apoderado de este territorio. El oro ya no es suficiente. La preocupación de los hijos de estas tierras es la de recuperar un poco de lo que les han quitado, principalmente su vocación agrícola: muchos no quieren seguir siendo mineros. Los habitantes tienen más costumbres y acento costeño que antioqueño. El Bagre es un municipio caluroso, la vegetación es escasa y abundan las motos, que son el transporte público. Tiene dos corregimientos importantes, netamente mineros: Puerto López y Puerto Claver. Gran parte de éstos pertenece a Mineros S.A., empresa que tiene unos 116 años allí y que ha cambiado de nombre y de dueños en muchas ocasiones para irse legalizando.

La minería que allí se practica es a cielo abierto: una retroexcavadora saca tierra y al lado los barequeros buscan su parte. En las buenas épocas hay hasta 400 barequeros en un mismo punto. En los ríos están las dragas, que ahora dominan la extracción. “Antes se veían hasta diez retros en un mismo punto: ya solo se ve una, por la persecución y porque ya todo ha sido explotado”, dice Manuel, un minero defensor de derechos humanos. “Ya Mineros explotó toda la tierra, nosotros estamos repasando. Se fueron para el río Nechí, al que le han causado graves daños. También tenemos las empresas brasileñas hace más de veinte años. Seguro en Brasil no los dejarían explotar tan libremente el territorio como aquí. Están llegando muchos”, cuenta Aramis, un minero tradicional de Puerto Claver.



Fotografía autora. Minería a cielo abierto en Puerto Claver

Mineros desvió el río y ocupó sus aguas para sacar oro. “Lo tiene dividido en varios canales, ha acabado con los humedales y no lo quiere reconocer ni enmendar”, comenta Fernando, un ambientalista de la región.

Puerto López

Puerto López existe desde hace unos cincuenta años y hoy cuenta con cuatro mil habitantes en el casco urbano. Tiene 18 veredas y dos resguardos indígenas. La violencia ha sido uno de los factores principales para que el corregimiento no sea apoyado por la alcaldía ni lleguen proyectos para el desarrollo. Allí confluyen los paramilitares, las FARC, el ELN y el Ejército.

El 7 de agosto del año pasado cinco mil personas salieron a manifestarse contra los actos violentos que se estaban presentando por esos días en el corregimiento: asesinatos, extorsiones y amenazas. Desde la vereda Caño Claro, estudiantes, mineros, comerciantes, agricultores, músicos, madres, padres, hijos, todos de camiseta blanca, recorrieron la carretera empedrada, llena de pantano, levantaron sus banderas y consignas, llegaron a Puerto López caminando, cruzando quebradas, para exigir que sean cumplidos los acuerdos que la misma comunidad creó para la sana convivencia: diez acuerdos que fueron firmados por los grupos armados y los líderes sociales.

Puerto López es temido por muchos foráneos, porque las noticias que sobre ese lugar publican algunos medios de comunicación no son muy alentadoras. Sin embargo, allí viven personas luchadoras, el señor Polo con sus acordeones, arrieros, navegantes, agricultores que durante décadas han tratado de menguar la violencia que los atormenta. Esa violencia viene de unos quince años atrás, pero “hoy cambiamos ese capítulo de página. Nos hemos



Fotografía autora. Movilización en Puerto López

reunido los líderes de las veredas y el corregimiento. Hemos creado unas normas de convivencia, que se generaron por el tipo de violencia que se da en el casco urbano, por las víctimas de los paramilitares, porque cobran vacunas a los negocios, porque están sacando la gente de aquí por las acusaciones de apoyar a otros grupos de los que ellos son rivales, por asesinar sin razón”, dice Francisco Santos, representante legal de la Asociación de Agricultores de Puerto López.

Lo que pide la comunidad es que los dejen vivir con tranquilidad y sin temor, no seguir siendo el escudo de los grupos armados. “Que se respete la vida, la libre movilidad y las decisiones de la comunidad”, como afirma Jairo Rodríguez, líder del corregimiento. Fue la primera vez que el corregimiento se vio tan visitado. Las banderas blancas se agitaron por la exigencia de la paz, porque todos están cansados de la guerra. “Queremos que Puerto López no sea mirado como productor de guerra. Aquí también producimos paz. Nos estamos preparando para el posconflicto, porque creemos firmemente en el proceso de paz”, concluye Jairo.

Sin embargo, dos meses después de firmado el pacto, hubo enfrentamientos entre el ELN y los paramilitares en un espacio pú-

blico, que dejaron un niño herido y un paramilitar muerto y otro herido, lo que hizo que toda esperanza se esfumara y, por el contrario, aumentara la violencia y los enfrentamientos se agudizaran. Los acuerdos se rompieron y hoy la comunidad teme ser desplazadas y perder la vida.

Puerto Claver

Es un corregimiento de doce mil habitantes, el más grande que tiene El Bagre. La temperatura llega hasta los 42 grados. El río Nechí era la arteria principal de Cauca y El Bagre, pero las comercializadoras fueron atacadas. Ya no se podían sacar los productos y esa vía fluvial tuvo que cerrar. Se instaló la coca como opción de sustento, y con ella llegó la violencia. Después la coca fue reemplazada por la minería. “Cuando llegó la primera motobomba, se estableció la minería y fue robándose a los agricultores”, cuenta Aramis. Y luego llegaron las retroexcavadoras y el pueblo se volvió totalmente minero.

En Puerto Claver es donde Mineros S.A. más ha explotado la tierra. Cuentan que en una época la empresa entregaba a las comunidades gran parte de sus extracciones, pero cuando la administración municipal empezó a manejar las regalías, todo cambió. Ahora tiene grandes títulos a perpetuidad que le fueron regalados. Y la policía se ha encargado de increpar al pequeño minero sin tocar a los que tienen muchas máquinas. “Es injusto que la policía nos ataque a nosotros. Nos persiguen con bombas y dinamita. Hace unos meses quemaron una máquina. Nos las queman cuando apenas las estamos pagando, y ellos mismos permiten que entren al país”, cuenta Manuel, y recuerda que la última vez la comunidad no dejó quemar una máquina.

Al pequeño minero le darán un carné para que pueda vender oro, sin él no será posible ninguna transacción y para obtenerlo debe justificar y demostrar su labor. “El carné esclaviza al barequero para toda la vida, lo limita, porque en cualquier momento puede



Fotografía autora. Minero de Puerto Claver

encontrar más oro y subir de nivel”, comenta William, otro minero que no ve el panorama alentador.

Desplazamiento masivo

El Bajo Cauca vive hoy una grave crisis de derechos humanos, principalmente en los dos corregimientos de El Bagre y en sus veredas, donde la incursión paramilitar ha dejado un saldo de 600 campesinos desplazados en Puerto Claver, sin contar los que se han ido del corregimiento ni los dos desaparecidos y los siete muertos que aún no han podido ser reconocidos por sus familiares.

En la casa del Adulto Mayor de Puerto Claver estuvieron refugiadas algunas de las familias desplazadas, otras llegaron a casas de familiares. Estuvieron allí durante tres meses porque la situación de violencia en sus veredas era insostenible y aún son señalados de ser colaboradores de la guerrilla. La vereda La Llana está amenazada de ser incendiada por esa misma razón, y las casas de sus habitantes fueron destruidas. “Todo inició el jueves 7 de enero de este año, tipo una y media de la tarde. Llegaron cien hombres y se asentaron en un cerro llamado El Cerrito, entre las veredas Coral, Primavera, La Cuesta y La Llana. Hubo disparos con las FARC, pero no fueron muy prolongados. El viernes se volvieron a repetir los enfrentamientos y las Autodefensas Gaitanistas –esas eran las insignias que llevaban– retuvieron a tres personas: a Francisco Moreno, a Francisco Barbutín y a Jair de Jesús Suárez; uno de ellos todavía está desaparecido. “El sábado por la tarde se formó un enfrentamiento más grande que duró dos horas”, cuenta un campesino que presenció todo. Ése sábado se reunió la gente de las veredas cercanas para estudiar la situación y realizar alguna acción para salvar sus vidas. “Hemos to-

mado la decisión de desplazarnos el día domingo, todos llegamos al acuerdo porque estamos corriendo peligro, hubo varios retenidos, golpeados y amenazas –afirma un líder de la comunidad–. “Hay una tensión, no solo entre las familias desplazadas de las veredas sino en el corregimiento en general. No hay libre movilidad. El tránsito está cortado porque a los conductores les da miedo andar por las carreteras. Hay un bloqueo económico, se militariza y paramilitariza más la zona”.



Fotografía autora. Refugio en Puerto Claver

Veredas despobladas

En algunas de las veredas de Puerto Claver aún se conserva la vocación agrícola; aunque alternan el trabajo con la minería, la siembra de pancoger es lo primordial. Quince días después del desplazamiento de los campesinos, algunas organizaciones defensoras de derechos humanos, abogados y medios de comunicación alternativos viajamos al corregimiento para verificar la situación en las veredas, pues las denuncias eran graves y el miedo los tenía paralizados.

En las veredas Coral y Primavera fue donde se presentaron los enfrentamientos más fuertes, y quedaron totalmente despobladas. Estuvimos recorriéndolas y encontramos una realidad cruda y una negligencia del Estado en reconocer que estas comuni-

dades corren peligro.

En Primavera todas las casas estaban cerradas y solas, un gato y algunas gallinas deambulaban por los caminos de tierra. En una de las casas habían armado una estufa improvisada, donde quedaban rastros del consumo de gallinas, y al lado, esparcidos por el suelo, empaques vacíos de las provisiones del Ejército. En otra casa había un perro, esperando a sus amos o a la muerte, junto a la nevera destruida y ollas en el suelo. En las paredes aún colgaban las fotografías de familiares o esquelas románticas, algún calendario lunar, empaques de chocolates finos.

Al revisar las otras casas, nos encontramos un gato muerto, el ganado flaco alrededor de un árbol y sin posibilidad de un bocado, los patos y las gallinas pidiendo alimento, las cosechas de plátano, yuca y maíz cortadas.

De camino hacia la vereda Coral era necesario pasar por una de las casas de donde se habían recibido malas noticias. Era la del señor Francisco Moreno de 82 años, quien fue desaparecido y luego desenterrado de una fosa al lado de su casa. Parecía como si un tornado hubiera pasado y entrado a cada rincón a remover los objetos de esa casa sencilla, de madera, para dejarlo todo en sitios y posiciones diferentes: la abundante cosecha de arroz destruida, los colchones debajo de las camas, la ropa colgada del techo, las ollas aplastadas y los platos quebrados. Fue en esta casa donde los paramilitares amarraron a los retenidos, al pie de un árbol. Francisco Barbutín, el que pudo contar la historia y nos acompaña en el recorrido, muestra el tronco del árbol donde los amarraron a los tres y los rodearon de herramientas de tortura. Les preguntaban por la guerrilla, les decían que se desmovilizaran, insultos y amenazas era lo que recibían. A él lo soltaron, dijeron que no lo necesitaban.

Todavía había un martillo y unas ollas tiradas junto al árbol. A un costado de la casa estaba la fosa donde habían enterrado a Francisco Moreno en posición fetal. El olor era casi insoportable. Hacía dos días que la fiscalía lo había sacado de ahí, y el lugar todavía estaba rodeado con cinta amarilla.



Fotografía autora. Mensajes dejados por los paramilitares

Seguimos el recorrido hacia la casa de Francisco Barbutín y nos encontramos con que allí estaba el Ejército viviendo, durmiendo en hamacas, sin los uniformes completos. Inmediatamente nos vieron, se empezaron a arreglar y a disponerse para el trabajo. Los vimos irse, la mayoría para un bosque cercano en el que se perdieron.

Un soldado nos abordó para decirnos que el comandante quería hablar con nosotros. Pero nos puso a esperar media hora. Con tono agresivo, nos informó que ya la zona estaba tranquila y nos dijo que la comisión debía ayudar para que los campesinos regresaran, ya que “se fueron porque quisieron”, y “no se debieron de ir” porque “allá no está pasando nada”, y “a la vereda llegan unos bandidos, hacen de las suyas, se visten de civil y se van. Ya la vereda está poblada otra vez, se ven luces prendidas en la noche y escuchan música a alto volumen”. Eso contradice los testimonios de las 600 personas desplazadas del corregimiento y sin posibilidad de regresar.

La casa de Barbutín había sido saqueada. Apresurado, llegó a mirarlo todo. Pero sus ojos se le cayeron de la tristeza al ver su casa abandonada y al Ejército apoderado de su terreno. Antes de salir de allí, vi dos gallinas amarradas como abastecimiento. De la única forma que podían haber llegado hasta ahí era que las hubieran tomado de alguna de las casas de los campesinos desplazados, pues el casco urbano queda lejos. También vi, desde el carro, cuando el resto de la tropa volvió a salir del bosque.

La historia de Jair de Jesús

La última casa que visitamos fue la de Jair de Jesús, uno de los desaparecidos, de quien la Fiscalía no ha dado reporte después de varios meses de haber hecho el levantamiento de los cuerpos que encontraron por estas veredas. La familia de Jair fue amenazada y tuvieron que dejar el corregimiento. Un hermano suyo narró el angustiante momento en el que desapareció.

“El sábado 9 de enero cogieron a mi hermano. Él salió en la mañana a llevarle comida a Pedro Manuel, un vecino de bastante edad que vive solo. Jair lo traía y lo llevaba a la casa para alimentarlo y darle un paseo. Ese día fue a la casa de Pedro y no volvió, iba con un niño vecino y el niño regresó solo. En la tarde, mi cuñada vio que llegó gente armada preguntando por ella. También hubo enfrentamientos, uno en la mañana, otro en la tarde. Ella se metió bajo la cama, luego salió para el monte a esconderse y demoró dos horas para salir. Estaba sola. Ellos cuidaban una finca, tenían cuatro meses de estar allí”.

“Tenían animales de granja y cultivos. A los diez días de estar desaparecido mi hermano, volvimos a la casa y nos encontramos con que acabaron con todo: las puertas picadas, el televisor destruido, la ropa regada por toda la casa, hasta los platos los quebraron. Se llevaron todos los animales,

los peces, los pollos. Dejaron marcas en la pared que dicen ‘muerte a colaboradores’, ‘muerte a guerrilleros’, ‘vencer o morir’, ‘El Paisa’, ‘AGC’, ‘El Manco’. También escribieron en los colchones, en los árboles. En el monte los paramilitares usan ropa negra, chalecos antibalas, botas militares, armas largas. Siempre están agresivos con la gente, insultan, golpean”.



Fotografía autora. Casa Jair de Jesús.

El Ejército estuvo entregando las ayudas que otros municipios y organizaciones enviaron para los desplazados. Entraban con armas al refugio e insistían en el retorno. “El Ejército quiere ganarse su lugar para tapar todo lo que sucede en nuestras veredas”, dice un líder. Sin embargo, algunos que se aventuraron a ir a mirar sus casas cuentan que se tuvieron que esconder porque por ahí veían a los paramilitares, inclusive al otro lado de donde estaba el Ejército, del que los separaba una quebrada. En el refugio mismo sabían de la presencia de infiltrados que estaban tomando fotos, haciendo preguntas.

A mediados de abril algunos retornaron, pues en el refugio ya estaban aguantando hambre, no había agua y no contaban con condiciones dignas para una vida tranquila. Regresaron a sus casas, pero se encontraron con que habían sido usurpadas. No recibieron ningún acompañamiento del Estado que les brindara garantías para el retorno.

La Unidad de Víctimas les prometió dos mercados. Ellos, solos, decidieron reconstruir sus fincas.

El interés principal en El Bagre y en todo el Bajo Cauca es el de explotar todas las tierras. Muchas empresas mineras tienen el ojo puesto en estas veredas, y no han podido entrar porque saben que hay presencia guerrillera y no permiten la explotación. También es constante la persecución y el asesinato de líderes sociales. El último caso fue el de William Castillo, asesinado el 7 de marzo en El Bagre, un líder que estuvo afrontando el desplazamiento de estas comunidades. Casi todos los líderes tuvieron que salir de la región porque sus vidas también corren peligro.

Y a final de abril también asesinaron al ex concejal Wilson Hoyos de Puerto Claver. En la plaza central lo hirieron. Los habitantes del corregimiento pidieron ayuda al Ejército, que está asentado ahí mismo, para que llevara a Wilson al hospital de El Bagre, pero se negaron a hacerlo. Desde el puesto de salud del corregimiento, donde lo estabilizaron un poco, enviaron una misión médica para El Bagre, por el río Nechí. Antes de que llegaran al municipio, otro grupo de paramilitares amenazaron a la misión médica y los obligaron a lanzarse al río y después ultimaron la vida de Wilson.



Fotografía autora. Cruzando el caño en Puerto López